

CONCLUSIONES DE LA XXVI INTERPARLAMENTARIA POPULAR

Entre el 20 y el 21 de enero de 2024, el Partido Popular se han celebrado en Ourense las primeras jornadas de la XXVI Unión Interparlamentaria bajo el lema “Cumplir con la palabra”: La premisa de nuestra forma de hacer política y de responder a lo que la sociedad necesita y espera de nosotros desde la responsabilidad y la coherencia con los valores que defendemos, entre ellos, el principio de igualdad entre todos los españoles.

Durante estas jornadas, han participado 42 ponentes y se han celebrado 4 mesas de trabajo, además de una mesa de los portavoces de las diferentes cámaras: Senado, Congreso de los Diputados y Parlamento Europeo. Además, y con el fin de que la 26 Interparlamentaria recogiera también las singularidades de la comunidad autónoma en la que nos congregamos, se contó con la presencia de diputados autonómicos, senadores y conselleiros gallegos.

Por ello, cada una de las mesas ha sido moderada por un representante institucional gallego; ha estado coordinada por cada vicesecretario de área; todas las comunidades autónomas han tenido voz a través de sus diputados autonómicos y también han intervenido como ponentes diputados nacionales, senadores y europarlamentarios. El objetivo ha sido garantizar la representatividad y la exposición de las propuestas de todos los territorios de España y destacar el sello distintivo de Galicia.

Tras la celebración de estas mesas, y de acuerdo con los debates que en el seno de las mismas han tenido lugar, se recogen a continuación los ejes sobre los que el Partido Popular se compromete a seguir avanzando.

SOLIDARIDAD INTERREGIONAL COMO GARANTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES.

En el Partido Popular no vamos a cejar en la defensa de la igualdad como pilar de nuestra acción política. La Constitución establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado, por lo que debemos impulsar la vertebración territorial de España y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de donde residan, cuenten con el acceso a servicios públicos de calidad y oportunidades de desarrollo profesional y de un proyecto de vida.

Por ello, defendemos el reforzamiento de mecanismos de solidaridad que permitan paliar las diferentes necesidades de financiación entre las regiones de España. Un modelo que no se construyó contra nadie, ni a costa de otros, y que hemos conquistado gracias al esfuerzo de todos los españoles.

Esta igualdad y esta solidaridad entre territorios se quiebra cuando se rompe el marco constitucional y cuando se aprueban privilegios en favor de unos pocos y en detrimento del resto de CCAA. No son admisibles más negociaciones bilaterales que anteponen intereses partidistas a los de todos los españoles, como está sucediendo con los acuerdos del actual gobierno con los partidos que abogan por la independencia de Cataluña.

El gobierno de España debe centrarse en resolver los problemas reales de los españoles y en afrontar los retos que nuestra sociedad tiene por delante garantizando un Estado del Bienestar de calidad. Entre otros, nuestro país se enfrenta actualmente a un reto demográfico significativo que plantea amenazas a diversos aspectos de la sociedad, la economía y los servicios públicos. Es esencial abordar este problema de manera integral para preservar la estabilidad y el progreso. En este contexto, la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar y la calidad de vida se convierten en pilares fundamentales. Garantizar que las futuras generaciones disfruten de los mismos estándares y beneficios requiere políticas que fomenten el crecimiento poblacional y al mismo tiempo respalden la equidad social.

En este proceso, insistimos en que hay que poner un énfasis especial en la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Las características que definen la población en nuestro país no pueden traducirse en la disminución de servicios y oportunidades.

NUESTRAS PROPUESTAS:

- La convocatoria de una Conferencia de Presidentes para decidir entre todos el futuro de España y el modelo de convivencia. Ni los golpistas, ni los prófugos, pueden decidir sobre nuestro país. Las decisiones que afectan a todas las comunidades autónomas deben ser adoptadas con la participación de los gobiernos de todas las comunidades autónomas.

Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular ya han solicitado por escrito la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, superando los 10 exigidos por el artículo 4.2 su reglamento.

- El Partido Popular se compromete con la defensa de la capacidad redistributiva del Estado, tanto la personal como la territorial.
- Exigimos que cualquier acuerdo de gobierno que afecte al sistema de financiación autonómica, o condicione la capacidad financiera de la administración general del Estado en relación con la financiación de las comunidades autónomas, sea exclusivamente el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política fiscal y financiera y nunca de un acuerdo bilateral con una comunidad autónoma o de un acuerdo parlamentario entre partidos.

Es necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica, en paralelo al de financiación local, que garantice la prestación de servicios públicos sanitarios, educativos y de servicios sociales de calidad. La igualdad y la solidaridad entre territorios tiene que ser el eje vertebrador de este sistema.

- La ruptura de la caja común de la Seguridad Social y el establecimiento de privilegios a unos territorios frente a otros, pone en riesgo nuestros actuales servicios públicos e incluso las inversiones en infraestructuras básicas de transporte.
- Defendemos un autonomismo útil y leal, como ya lo hacemos en las CCAA en las que gobernamos.
- Desde nuestros gobiernos autonómicos reforzaremos la colaboración y coordinación entre regiones para mejorar la calidad de los servicios públicos y la defensa de los intereses de los ciudadanos.
- Impulsaremos la actividad de la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, con el fin de fomentar en la misma el debate sectorial entre comunidades autónomas sobre cuestiones de su ámbito competencial, orientado a favorecer la cooperación institucional entre las mismas que redunde en la mejora de la calidad de los servicios que prestan los ciudadanos.
- Desde el Partido Popular exigimos un reparto más equilibrado de los objetivos de déficit, llegando las comunidades autónomas al menos al 0,3 por ciento de déficit para 2024.
- El Gobierno tiene que saldar de una vez por todas sus deudas con los ayuntamientos. Se ha producido un primer pago a los ayuntamientos de 434 millones de euros por el mantenimiento al cien por cien de los servicios de transporte urbano pese a las restricciones del Covid relativas al año 2020. Sin embargo, el Gobierno aún adeuda a los ayuntamientos los pagos de los años 2021 y 2022.

- Pedro Sánchez anunció durante el debate de su investidura la gratuidad del transporte urbano para jóvenes y desempleados. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno no ha concretado esta medida ni ha aclarado a los ayuntamientos a través de qué vía les compensará por este servicio que es fundamentalmente de competencia municipal. Los ayuntamientos, por tanto, no pueden seguir siendo una caja registradora con la que se financia el gobierno.
- Promoveremos políticas inclusivas que garanticen un acceso equitativo a la educación, la salud y las oportunidades laborales también en la España despoblada:
 - Defensa de un Plan de Apoyo a la España despoblada.
 - Creación de un Foro permanente para coordinar políticas rurales.
 - Impulso de una Ley de Desarrollo Rural para todo el territorio nacional.
 - Seguir avanzando en medidas que garanticen la conciliación familiar.
- Reducción drástica de gasto improductivo. Actualmente, el coste derivado de una administración mastodónica, con 22 ministerios y cientos de asesores, y miles de millones en gastos superfluos hubiera permitido que esa cifra se utilizase para políticas activas de empleo, ayudas a los más necesitados o proyectos de inversión sostenible.
- Es imprescindible mantener un acceso a la Función Pública transparente con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, como garantía de independencia y calidad en la prestación de los servicios públicos, considerando al capital humano como una pieza fundamental, abogando por su motivación, formación y adecuada retribución económica.
 - Previsión con antelación suficiente de las necesidades futuras, con estimación de las jubilaciones, evolución de la población y demás factores, que permita anticipar suficientemente tanto la formación como la selección.
 - Mayor regulación de la figura de la permuta de puesto que permita movilidad entre diferentes Comunidades Autónomas y resto de Administraciones Públicas.
 - Incentivos a nivel de carrera profesional para fomentar cubrir puestos en zonas en las que existe una elevada vacancia. Elaboración previa de un catálogo de dichos puestos.
- La igualdad entre territorios también es fundamental para garantizar el acceso equitativo a servicios públicos de calidad, especialmente en los ámbitos de la sanidad y la educación. Este principio asegura que todos los ciudadanos independientemente de su ubicación geográfica, tengan la misma oportunidad de beneficiarse de un sistema de salud eficiente y de una educación sólida.



Por ello, seguiremos reclamando al gobierno que dé solución al déficit de especialistas en medicina familiar aplicando un Plan de Choque para la Atención Primaria, entre otros.

APOYO A LAS FAMILIAS Y A LAS EMPRESAS

La economía sigue siendo una de las principales preocupaciones para los españoles, en particular la inflación y el desempleo. Según el último barómetro europeo, publicado a finales del mes de diciembre, para 7 de cada 10 españoles la situación económica actual en España es mala, mientras que a nivel europeo sólo la valoran de forma negativa el 48%.

La pérdida del poder adquisitivo derivada de la crisis de inflación que viene sufriendo España desde 2021 ha hecho que el salario medio pierda 615 euros de poder de compra. El IPC acumulado durante el periodo de gestión del PSOE al frente del gobierno de España llega al 17'3 % con un impacto directo en el incremento de los costes para las familias y para las empresas.

La inflación es el impuesto más injusto y que mayor desigualdad genera, puesto que paga igual el que más tiene que el que menos tiene. La gestión de los gobiernos de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha demostrado que se pueden bajar los impuestos garantizando al mismo tiempo unos servicios públicos de calidad.

Más allá de las propias cifras que el Gobierno quiere vendernos, la realidad es que la deuda pública ha alcanzado máximos históricos llegando a los 1,57 billones de euros, comprometiendo, vía carga de intereses, el margen presupuestario y de endeudamiento de la economía española, la destrucción de más de 70.000 empresas desde que gobierna Pedro Sánchez y la temporalidad del mercado de trabajo, donde 8 de cada 10 empleos creados es temporal, fijo discontinuo o indefinido a tiempo parcial.

Desde el Partido Popular apostamos por tener más empresas, que éstas sean más competitivas, más grandes, abiertas e internacionalizadas. Para lo cual, es necesario un mercado de trabajo dinámico, seguro y flexible que dé las facilidades necesarias para que se pueda generar más empleo y de mejor calidad, un capital humano formado y con las competencias profesionales que demanda el mercado laboral, así como crear las condiciones necesarias para la implantación de empresas en nuestro país.

Por ello, defendemos reformas que garanticen la estabilidad institucional y la seguridad jurídica; reformas que simplifiquen la maraña administrativa y burocrática; la digitalización de la administración para facilitar una interacción más ágil y dinámica con el ciudadano, etc. Todo ello, con el claro objetivo de reforzar nuestra competitividad, centrar mejor nuestras inversiones, cooperar con las empresas, atraer talento a nuestro país y ser capaces de responder a las aspiraciones de las familias en general y de las personas en particular.

Si consideramos que uno de nuestros objetivos principales es promover una sociedad española más libre, competitiva y talentosa, resulta fundamental reconocer la estrecha conexión entre este propósito y la defensa activa de la igualdad y la conciliación familiar y laboral. Fomentar la equidad de oportunidades y eliminar barreras de género y sociales permite aprovechar todo el potencial de la población, generando una fuerza laboral diversa y talentosa. La conciliación facilita un entorno donde los individuos pueden desplegar sus habilidades sin sacrificar su vida familiar, promoviendo así la productividad y el bienestar colectivo. En conjunto, la igualdad y la conciliación no solo enriquecen la sociedad en términos humanos, sino que también fortalecen su competitividad al capitalizar la diversidad de talento disponible.

NUESTRAS PROPUESTAS:

- Aliviar la carga fiscal de los impuestos de titularidad autonómica en el marco de sus competencias, manteniendo la política que ha caracterizado al PP en aquellas CCAA en las que gobierna o ha gobernado, permitiendo un equilibrio entre la dinamización de la economía y la creación de empleo con la financiación de los servicios públicos.

Las comunidades en las que gobierna el Partido Popular tienen en este momento medidas de rebaja de impuestos que superan los 2.000 millones de euros. Esta rebaja de impuestos afecta desde el IRPF, al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pasando por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (que afecta a la compra de una vivienda de segunda mano) o el impuesto de matriculación.

- OTRAS REBAJAS FISCALES:
 - Ampliación de la exención de IRPF en el mismo porcentaje que se incrementa el Salario Mínimo Interprofesional.
 - Rebaja del IRPF vía deflactación para rentas menores de 40.000 euros.
 - Rebaja del IVA de carne, pescado y conservas. El Gobierno, a pesar de que los alimentos han subido casi un 12% en 2023, sigue sin ampliar la rebaja del IVA a la carne, al pescado y a las conservas como llevamos pidiendo desde hace meses.
 - Rebaja de la factura de la luz y el gas. Duplicar el IVA de la luz y el gas como ha hecho el Gobierno, en lugar de mantenerlo al 5% como proponía Feijóo, provocará que la factura de una familia media incremente su factura un 10% en el caso de la electricidad y de un 20% en el caso de la calefacción.

- Garantizar una mayor estabilidad institucional y más seguridad jurídica para atraer más inversión nacional y extranjera, más talento y ofrecer mejores condiciones de vida a los ciudadanos.
- Fomentar la Formación Profesional Dual para acercar la formación a la empresa y ésta al mundo formativo. Provocar la reciprocidad tutorizada en la formación profesional. Impulsar las profesiones que demanda la sociedad mediante una formación práctica remunerada que permita conocer los aspectos más destacables de las empresas para que éstas puedan, a su vez, conocer, formar, coordinar e implantar un nuevo modelo formativo profesional adecuado a los diferentes sectores empresariales.
- Impulsar los programas de formación permanente para que al menos el 60% de los adultos participen en actividades de formación cada año y que al menos el 80% de los adultos tenga capacidades digitales básicas.
- Fomentar la **corresponsabilidad** como instrumento para educar en valores y fomentar el trabajo corresponsable en la familia y favorecer así el desarrollo personal y laboral de la mujer.
- MEDIDAS EN FAVOR DE LA CONCILIACIÓN:
 - Gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años en todas las CCAA gobernadas por el PP.
 - Seguir el ejemplo de Galicia en materia de conciliación:
 - En el año 2021 aprobaron la **primera Ley de Impulso Demográfico de toda España**. Una normativa que blinda y recoge los derechos de todas las familias.
 - Puesta en marcha de una red de recursos de conciliación en los ayuntamientos más pequeños y de carácter rural como lo son las **Casas Nido** en Galicia.
 - La **Tarjeta Bienvenida**. Una ayuda económica para las familias que deciden tener un hijo.
 - El **Bono Concilia Familia**, una ayuda económica para que los padres que trabajan puedan contratar un servicio de conciliación extraordinario siempre que lo necesiten.
- Reconvertir el Ingreso Mínimo Vital, en colaboración con las Comunidades Autónomas, en un verdadero instrumento de inclusión para las familias más vulnerables, en el marco de itinerarios de inserción laboral para maximizar sus oportunidades laborales.

- PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL A MENORES EN EL ENTORNO DIGITAL que incluye:
 - La implantación de procedimientos de verificación de edad verdaderamente eficaces para el acceso de menores a redes sociales y para evitar su acceso a páginas pornográficas, violentas o que comporten riesgo para el menor.
 - Dotar a los padres de herramientas para que den su consentimiento expreso en el acceso de sus hijos menores a las redes sociales.
 - Un plan estatal de prevención de la salud digital infantojuvenil basado en la prevención, la educación y la implicación de todos los implicados (familias, centros educativos, industria tecnológica...).
 - Un plan de lucha contra las adicciones en la infancia y la adolescencia, con atención especial a las adicciones tecnológicas.
- Asimismo, seguiremos proponiendo medidas concretas dirigidas a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género. Desde el Partido Popular siempre hemos considerado que la igualdad de género ha de ser una política transversal.

SECTOR PRIMARIO Y DESARROLLO RURAL

El sector primario es un elemento fundamental de la economía española, de la vertebración de nuestro territorio, de nuestra estructura social y de nuestra cultura. Cada año una media de 2.600 explotaciones agrícolas o ganaderas cierran sus puertas por la falta de relevo generacional, la pérdida de rentabilidad de las explotaciones, una política errática en materia de agua, así como la falta de criterio en iniciativas legislativas en cuestiones ambientales y de bienestar animal. Esta pérdida de peso del sector primario nos abocará a una dependencia casi absoluta de terceros países por la desaparición de la “España rural”.

Un Gobierno de España, lejos de buscar el diálogo, produce conflictos en el medio rural. Demoniza al sector ganadero y la producción de carne. No defiende nuestra pesca que es líder en Europa. Genera conflictos en el medio natural: en el despliegue de los parques solares fotovoltaicos y eólicos y la gestión del lobo, entre otros.

El sector agroalimentario debe dotarse de nuevos y más eficaces instrumentos que refuercen su carácter estratégico esencial, que garanticen el suministro a los mercados, que refuercen la sostenibilidad y la garantía de futuro de sus explotaciones y empresas agroalimentarias, y que contribuyan a revertir la pérdida de empleo y el abandono de la población en el medio rural, en el que los profesionales del sector se sigan formando y profesionalizando.

Necesitamos un sistema alimentario rentable, competitivo y sostenible, que evite la dependencia alimentaria de otros países y asegure alimentos de calidad accesibles a toda la población.

La ley de la cadena alimentaria ha generado aumento de importaciones de productos de otros países europeos para evitar la excesiva burocracia y es ineficaz para verificar que se cubren los costes de producción.

Reclamamos la ejecución íntegra y eficiente del PERTE agroalimentario dotado con 1.135 millones de euros y del que se ha comprometido gasto por menos del 20% del total, proponemos la revisión de la PAC, con más presupuesto, y menos obligaciones, restricciones y burocracia que surgen de una mala negociación ajena al interés de España. Asimismo, nos comprometemos y reclamamos que España siga siendo la huerta de Europa, promoviendo la exportación de nuestros productos, y mejorando la logística.

La población de los entornos naturales es la gran olvidada de la izquierda. El Partido Popular ha presentado un Plan Integral para combatir la despoblación en el mundo rural, entre los que se encuentra la fiscalidad específica, la prestación de servicios y la conciliación, la flexibilidad del empadronamiento, la bonificación de costes laborales en las provincias más despobladas, y los planes de asentamientos de industrias.

El gobierno desatiende la pesca tanto en dotación de fondos, como de personal. Lastra la gestión pesquera, desaprovecha cuotas disponibles, supone cierres prematuros de cuotas clave o nulo aprovechamiento de cuotas como sardina, anchoa

y caballa. Falta peso del Gobierno en las negociaciones con Bruselas y es incapaz de sacar adelante PERTE Mar Industria anunciado en 2022.

Desde el Partido Popular, también estamos comprometidos con el futuro de la pesca, clave para el litoral español. Deseamos una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que sea útil para que el sector pueda hacer frente con éxito a los numerosos desafíos.

PROPUESTAS:

- El Partido Popular ha presentado un Plan Integral para combatir la despoblación en el mundo rural con diez puntos fundamentales:
 1. Creación de un Foro permanente para conectar las políticas de todas las administraciones públicas que afecten al rural.
 2. Nuevas fórmulas de empadronamiento más flexibles para que los ayuntamientos de municipios más grandes y más pequeños compartan gastos e ingresos.
 3. Analizar nuevas bajadas de los impuestos, en el Impuesto de Transmisiones, en el de Actos Jurídicos Documentados o el IBI por comprar una vivienda en el rural.
 4. Impulsar políticas de rehabilitación de viviendas en los pueblos suprimiendo impuestos para este fin.
 5. Realizar planes sectoriales industriales para asentar industrias en el medio rural.
 6. Dedicar los fondos europeos a invertir en infraestructuras prioritarias como la banda ancha, para evitar que los pueblos queden incomunicados.
 7. Garantizar la prestación de la sanidad y la educación en los pueblos y, ante la escasez de sanitarios, primar a los médicos que decidan ejercer su actividad en el medio rural, de manera que estos destinos les supongan más puntos si quieren optar a un destino posterior en una ciudad.
 8. Fomentar la conciliación facilitando el cuidado de niños y mayores con la apertura de “casas nido” o casas de mayores en aquellos municipios con menos población, como se hace en Galicia.
 9. Establecer una fiscalidad específica para todo el medio rural exonerando de impuestos a las personas que articulen una industria, abran un negocio o que vendan, compren o permuten tierras.
 10. Bonificar los costes laborales en Soria, Cuenca y Teruel al máximo que permite la Unión Europea.
- Llevaremos competitividad a la agricultura:

- Se deben revisar criterios de la PAC, para establecer una tramitación de solicitudes simplificada y flexibilizar el cumplimiento de requisitos de prácticas agrícolas y ganaderas.
- Abogaremos por una mejora de la PAC de cara a la próxima negociación. Defenderemos en todos los foros una PAC beneficiosa para España. Vigilaremos la utilización de los fondos comunitarios de la PAC aplicados en España para que no se devuelvan a la UE por su mala gestión.
- Es necesaria una reforma del seguro agrario, con actualización de rendimientos y ampliación de coberturas ante problemas de mercados.
- Hay que incrementar la modernización de las explotaciones, su tecnificación y digitalización, así como incrementar su tamaño fomentando las cooperativas.
- La ganadería, además de proporcionar alimentos, es una aliada del medio ambiente. La ganadería contribuye a la configuración del paisaje, el cuidado de las dehesas, el aprovechamiento de pastos, la calidad del suelo, el fortalecimiento de la biodiversidad y la generación de servicios ambientales. La cabaña ganadera es también una aliada natural del monte. Contribuye a limpiarlo y actúa de barrera contra los incendios.
- La pesca es uno de los sectores más internacionalizados y exportadores. España tiene una posición de liderazgo en pesca. La pesca produce alimentos sanos y sostenibles. Es necesario fomentar el consumo de pescado, con reducción al 5% del IVA a productos del mar, el reconocimiento de su valor y con un etiquetado claro y veraz.
- Consideramos el sistema alimentario un sector estratégico. La industria alimentaria es la 1ª rama del sector industrial (23,3%) imprescindible para el sector primario y para asegurar disponibilidad de alimentos. Medidas necesarias:
 - Ley de apoyo al sistema alimentario como sector estratégico
 - Rebaja IVA alimentos e inclusión de carne, pescados y conservas
 - Reducción de costes: energía e impuesto al plástico
 - Reformar el PERTE Alimentario
 - Reformar la Ley de cadena alimentaria
 - Apoyo a la industria moderna: La bioeconomía, la innovación y la digitalización del sector alimentario en su conjunto.
- Mantendremos diálogo permanente tanto con las CCAA como con las diferentes organizaciones agrarias, alimentarias, y expertos para llevar propuestas conjuntas que garanticen el futuro del sector en nuestro país.

- Apostar por la formación y la profesionalización en el sector, especialmente a los jóvenes, para garantizar un relevo generacional con experiencia y habilidades en todos los ámbitos: ganadero, agrícola, forestal y cinegético.
- Mejorar la logística asociada a la distribución de productos, inversión en infraestructuras más sostenibles, empleando las redes ferroviarias y el uso del transporte marítimo.
- Impulsar programas de investigación e innovación en diversas materias como el uso eficiente de los recursos hídricos, la mejora continua de los cultivos o la apuesta por la sostenibilidad para el uso de fertilizantes.
- Simplificar la burocracia en los procesos de gestión, la tramitación de ayudas y la gestión de la tramitación administrativa.
- Defendemos las actividades tradicionales en el medio natural. La gestión forestal, el control de poblaciones, la caza y la pesca son necesarias para la conservación del medio ambiente y la fijación de población rural.
- Mejoraremos la “Marca España” para garantizar que nuestro país siga siendo la huerta de Europa.

INFRAESTRUCTURAS Y POLÍTICA INDUSTRIAL COMO ELEMENTOS CLAVE DE COMPETITIVIDAD

La reindustrialización es un factor de recuperación de empleo, innovación y competitividad, y una de las claves de nuestro futuro como país, en línea con las prioridades que ha asumido el conjunto de la Unión Europea.

Con el objetivo de impulsar el crecimiento competitivo de España, es necesaria una política seria tanto a nivel de infraestructuras e industrial, basada en la planificación de los recursos y con doble vertiente: la financiera y la voluntad política. Poner trabas a las empresas, tanto fiscal como administrativamente, obstruye la atracción de talento y la reindustrialización de nuestro país.

No existe industrialización sin conectividad y transporte. Seguimos reclamando la mejora de la conectividad de nuestro país a través de los Corredores Atlántico y Mediterráneo, para que más financiación llegue a nuestras infraestructuras e industrias, y que, a través del criterio de vertebración del territorio, se amplíen las rutas clave, y se garantice que la llegada de la alta velocidad llegue a los territorios que llevan años demandándolo. España tiene la necesidad de incrementar y conservar su red de carreteras, sobre las que reclamamos el fin de la subida de precios de los peajes.

Es fundamental avanzar hacia un gobierno modelo que aborde la digitalización, la introducción de la inteligencia artificial y la robotización en la resolución de los procedimientos, introduciendo estos avances en las relaciones con la administración, garantizando la seguridad en las operaciones evitando los ciberataques, especialmente en las pymes, más eficiente que el Kit Digital.

Como eje vertebrador de lo expuesto, la educación digital es prioritaria. Los gobiernos autonómicos del PP siguen liderando la FP especializada para el contexto industrial y tecnológico en el que nos encontramos.

El Partido Popular apuesta por la mejora de las infraestructuras, unida a la inversión en creación y mantenimiento del tejido industrial, así como la toma de decisiones claves, estratégicas e imprescindibles para garantizar la conectividad y vertebración del territorio.

PROPUESTAS:

- Reforzar la competitividad de la industria a través de las palancas vinculadas a la política energética, la inversión en I+D+i del sector privado, el acceso al suelo empresarial y las infraestructuras vinculadas, la apuesta por el talento, la fiscalidad y la logística.
- Garantizar la estabilidad del marco jurídico vigente generando confianza y certidumbre, simplificando la burocracia.

- Favorecer el desarrollo de tecnologías NET ZERO para cumplir los objetivos de reducción de emisiones al 55% en 2030 y los objetivos de neutralidad climática del 2050, mejorando las capacidades de producción e instalación de tecnologías limpias en la próxima década, la circularidad y la descarbonización del 3 proceso productivo, así como la necesidad de fortalecer la creación de una mano de obra cualificada.
- Potenciar la educación digital y especializada, la formación profesional. Proponemos un Plan de recualificación de los trabajadores de los sectores en reconversión por las tecnologías digitales.
- Mejorar las condiciones de los nuevos modelos de emprendimiento con planes de apoyo, retención de startups, y atracción de nómadas digitales.
- Revisar la estrategia de ciberseguridad de las AAPP para evitar duplicidad de infraestructuras y conseguir mayor coordinación y eficiencia
- Promover la creación de PERTES autonómicos que permitan que las Comunidades Autónomas, en al ámbito de sus competencias, puedan impulsar el desarrollo de inversiones en sus respectivos territorios en proyectos que respondan a los principios de transformación digital y sostenibilidad, recogidos en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- Promover la agilización en la gestión de ayudas al 5G Rural para garantizar la conexión y conectividad en nuestro territorio, evitando la despoblación y facilitando la implantación de empresas e industrias.
- Finalizar y priorizar la conectividad y el transporte en el territorio, garantizando la llegada de la Alta Velocidad a Galicia, País Vasco y Extremadura, y fomentando los corredores europeos atlántico y mediterráneo, así como el hidroduto en el Noreste. En la misma línea, debemos potenciar las conexiones a España por cable submarino como infraestructura de telecomunicación estratégica.
- Reclamamos la mejora de la red de carreteras y la congelación de los precios de los peajes.